

MUHAMMAD RAZA

Una valoración de la estrategia antiterrorista de Pakistán

Traducción de Olga Abasolo

Desde que tuvo lugar la expulsión de los talibanes de Afganistán, se ha pretendido equiparar el creciente respaldo que obtienen en las pobladas zonas pastún afgano-pakistaníes con una expresión del sentimiento nacionalista pastún contrario a la intervención extranjera en Afganistán. Si bien esta opinión puede encerrar una parte de verdad, lo cierto es que se trata más bien de una estrategia para encubrir determinados objetivos estratégicos de ambiciosos intereses creados en la región, fruto del fracaso de las iniciativas de la comunidad internacional en la región. Tras la derrota de los talibanes en Afganistán en 2001, estos, y sus aliados yihadistas, han tomado las Áreas Tribales bajo Administración Federal (FATA), para atacar desde ellas a las tropas norteamericanas de la OTAN tanto en Afganistán como en Pakistán.

Las FATA de Pakistán –que constituyen un vacío administrativo y legal– se han convertido en un escenario en el que se perpetran importantes violaciones de los derechos humanos;¹ además de constituirse en santuario del terrorismo internacional. Geográficamente, la zona está situada entre Afganistán y Pakistán; tiene una extensión aproximada de 27.220 km², y alberga a una población de más de tres millones de habitantes pashtoparlantes.² Se trata de una zona extremadamente deprimida, a juzgar por todos los indicadores sociales, que la sitúan muy por debajo de la media nacional de Pakistán.

Los británicos crearon esta zona tribal como parachoque entre Afganistán y la India unificada. El Reglamento sobre Delitos Fronterizos (FCR, por sus siglas en inglés), de 1901, sigue en vigor en las zonas tribales, y constituye el baluarte de la maquinaria opresora del Gobierno. Bajo esta ley, la persona o tribu, según sea el caso, a quien se acuse de infringir la ley, o con el objeto

Muhammad Raza es director de Baacha Khan Trust Educational Foundation (Peshawar, Pakistán)

¹ *Human Rights Abuses in the Search for Al Qaeda and Taliban*, Asia y el Pacífico, Pakistán, Amnistía Internacional, EEUU.

² *Demographic Indicators, 1998 Census*, Ministry of Economic Affairs and Statistics, Government of Pakistan http://www.statpak.gov.pk/depts/pco/statistics/demographic_indicators98/demographic_indicators.html (última consulta, junio de 2009)

de garantizar su buena conducta, deberá pagar una fianza (véanse apartados 40, 41), en caso de no cumplirse el pago, el acusado o la tribu serán sometidos a penas de tres años de encarcelamiento (véanse apartados 43, 44), sin que tengan derecho a recurrir ante un tribunal ni civil ni penal (véase apartado 48). La duración del periodo de encarcelamiento podrá prolongarse si el magistrado (agente político) así lo estima (véase apartado 45). El agente político cumple su servicio en nombre del Gobierno central de Pakistán en lo relativo a las tribus fronterizas. No obstante, de acuerdo al FCR, dicho agente –funcionario del Estado– actúa asimismo como fiscal, investigador y juez de varios delitos simultáneamente. Él es quien designa y nombra al consejo tribal, conocido como *jirga* (véase apartado 8), para indagar en los conflictos. Sin embargo, las pruebas halladas por dicho consejo no son vinculantes y el agente político puede o no coincidir con su opinión; la decisión del agente político no podrá cuestionarse ante ningún tribunal civil o penal (véanse los apartados 10, 60). Ni el Tribunal Superior ni el Parlamento de Pakistán tienen jurisdicción en las zonas tribales. Según los apartados 20, 21 del mencionado reglamento se permite el encarcelamiento de la totalidad de los miembros de una tribu *hostil o poco amistosa*, así como la confiscación de sus propiedades y el derribo de sus hogares (véanse los apartados 33, 34). Se pueden imponer multas a pagar por la totalidad de la tribu a la que pertenezca el acusado (véase la sección 22) y pueden confiscarse los emolumentos públicos de personas o de una tribu en particular culpable o cómplice de crímenes. A pesar de estos poderes arbitrarios, el Gobierno pakistaní no ha sido capaz de erradicar a los talibanes ni a sus huéspedes árabes, uzbekos, chechenos y punjabíes. Las autoridades federales pakistaníes aún están atrapadas en la mentalidad de la era de la guerra fría, de acuerdo a la cual las FATA constituyen un trampolín estratégico para la política con Afganistán. El aislamiento de las FATA del resto del territorio pakistaní, y la privación de derechos de una población de más de tres millones de habitantes, es la “política afgana” de Pakistán.

Las FATA y la política afgana de Pakistán

La escalada de la actividad terrorista en las FATA constituye un hecho enormemente preocupante. El progresivo empeoramiento de la seguridad en Waziristán, y por tanto también en otras zonas, es el efecto secundario inmediato de la política dual del Gobierno pakistaní hacia Afganistán. Este, por un lado, afirma ser aliado de EEUU y de otros países en la guerra contra el terrorismo, y por otro, ha permitido que algunos líderes talibanes actúen desde sus bases en Pakistán en el este y el sur de Afganistán.

Entre algunos grupos de la clase dirigente de Pakistán circula la opinión de que las tropas de EEUU se retirarán de la región, lo que provocará la ruptura de Afganistán. Ante tal eventualidad, esperan controlar el sur y el este de Afganistán a través de los talibanes, sin advertir el hecho de que como resultado de ese proceso también podría producirse la desin-

tegración de Pakistán. Pakistán pretende, asimismo, mantener a los talibanes como medida de presión contra Afganistán para forzar que la disputa en torno a la denominada Durand Line se resuelva bajo sus términos.

En las FATA, el sistema tradicional de gobierno indirecto heredado del periodo colonial se ha desmoronado. Bajo dicho sistema el orden judicial del Estado se estableció mediante el control social ejercido por la pequeña nobleza tribal (representada por los *maliks* o jefes) y por las “costumbres tribales”. Este control social se ha roto dado que, por un lado, Al Qaeda asesina y aterroriza a los líderes tribales que se niegan a colaborar con ellos y, por otro, el control militar de la Administración civil ha minado notablemente la autoridad del agente político (tradicionalmente el poderoso jefe administrativo de la agencia política) que es quien trata con los jefes tribales. En consecuencia, el Estado se encuentra en situación de dependencia de otras instancias a la hora de aplicar las órdenes judiciales del Gobierno, con la complicación añadida de que *el aumento de los daños colaterales conduce a una mayor alienación y hostilidad entre la población tribal, hecho que explotan los terroristas.*

El progresivo empeoramiento de la seguridad es el efecto secundario inmediato de la política dual del Gobierno pakistaní hacia Afganistán

Las FATA, fuente ilegal de riqueza

Merece la pena mencionar que además del enfoque geoestratégico de Islamabad con respecto a mantener el aislamiento de las FATA, existen grandes intereses creados para no permitir reformas sustanciales en las mismas. El atractivo financiero constituye la base de las intrigas y corruptelas de la Administración de las FATA. La ausencia de un sistema fiscal transparente y responsable actúa como pantalla de humo para la recaudación de impuestos ilegales en nombre de algunos fondos asistenciales por parte de las autoridades políticas de diferentes organismos como la Bajaur Welfare Fund, Momand Welfare Fund, Agency Development Welfare Fund (Khyber) y la South Waziristan Social Welfare Fund. Estos fondos jamás están sujetos a auditoría y sólo el agente político tiene autoridad sobre su utilización.

Existen cadenas y barreras que delimitan las carreteras de diversas localidades en cada provincia para recaudar los denominados “impuestos”; evitar el “contrabando” y controlar a

los “elementos antisociales”. El comercio a través de las fronteras, al que oficialmente se conoce como contrabando, es la principal actividad económica de subsistencia de la mayoría de la población de FATA. La oficina central de cada agencia actúa como lugar de tránsito para los bienes que supuestamente van dirigidos a Afganistán y que en su lugar van directamente a los mercados pakistaníes después de pasar por algún papeleo en la frontera pakistaní-afgana. Además, las autoridades políticas otorgan permisos para la exportación de alimentos tales como vacas lecheras, aves de corral y trigo. Se calcula que los “impuestos” no contabilizados y gravados sobre estas mercancías en diversas rutas de paso en las FATA ascienden a cientos de millones de dólares al año. Pero, incluso el Central Board of Revenue de Pakistán no reconoce la existencia de tamaña pérdida para el erario público. Por razones obvias, se guarda un discreto silencio en cada una de las dependencias del Gobierno responsables de estos descuidos.

**Las FATA están en situación de extrema precariedad.
Según las estadísticas oficiales, el 60% de la población está
por debajo del umbral de pobreza**

La “*teega Fund*” es otra fuente de financiación ilegal a disposición de la Administración de las provincias; se compone de multas colectivas impuestas sobre las tribus por no colaborar con la maquinaria del Gobierno, en forma de deducciones salariales realizadas por los *khasadar* (una fuerza de seguridad compuesta por miembros de las familias influyentes locales) bajo el pretexto del incumplimiento del deber. La administración de este fondo no está sujeta a auditoría alguna, ni a ninguna norma o regulación. El cuerpo de los *khasadar* ha degenerado hasta tal punto que los puestos están descaradamente a la venta e incluso sus salarios van a parar directamente a los bolsillos de mandos superiores de la Levies Force y de la policía política. Los *khasadar* están más que satisfechos de recibir un subsidio de pensiones a cambio de no prestar servicio regular al cuerpo.

El componente más inquietante de las fuentes de ingresos ilegales en las FATA es el sistema de contratación de las obras públicas. Los contratistas no tienen cualificación previa y las ofertas no se sacan a concurso público. Las autoridades políticas “proponen” a los contratistas para la ejecución de las obras. Los agentes políticos tienen la última palabra, desde la elección del lugar en el que se ejecutarán las obras hasta las condiciones de los acuerdos contractuales y el desembolso de los fondos de las ayudas al desarrollo. Entre los beneficiarios de las mismas se halla un influyente *malik* (anciano de la tribu); funcionarios de los departamentos del Gobierno; y la administración política y los propios contratistas. No existen estadísticas fiables, pero los fondos federales y las ayudas de los donantes supuestamente dirigidos a los proyectos contra el narcotráfico

han producido resultados nada satisfactorios en términos del impacto en el desarrollo en proporción con las cantidades asignadas. Además de las autoridades políticas existen otros departamentos del Gobierno que también se benefician de la gallina de los huevos de oro de FATA.

FATA está en situación de extrema precariedad. Según las estadísticas oficiales, el 60% de la población está por debajo del umbral de pobreza. La agricultura es exigua y no puede constituir una forma de subsistencia para una población en constante crecimiento. El conservadurismo y el analfabetismo son males endémicos.

Los habitantes de FATA están atrapados entre las tensiones locales, regionales e internacionales. Los enfrentamientos esporádicos entre los organismos de la seguridad del Estado y los terroristas se deben a que estos últimos reclaman indulgencia por parte del Gobierno pero no están dispuestos a aceptar el control al que las fuerzas de seguridad quieren someterles. Al margen de esto, se toleran mutuamente.

La talibanización galopante en la NWFP

La violencia terrorista avanza irremisiblemente a lo largo de los “distritos asentados” de la Frontera de la Provincia Noroeste (NWFP, por sus siglas en inglés) –contigua a las FATA– e incluso se extiende hacia las grandes ciudades como Lahore e Islamabad/Rawalpindi. Millones de personas han resultado desplazadas desde Waziristán, Swat, Dir, Bajaur, Momand y Malakand hacia las llanuras de Peshawar en busca de refugio en su huida de la violencia. Los “talibanes locales” actúan en el sur, y el Tehrik-e-Nifaz-e- Shariat-e-Mohammadi (TSNM o movimiento por la restauración de Sharia of Mohammad) ha tomado la División de Malakand en el norte de la provincia. El gobierno provincial de NWFP (Pukhtunkhwa) firmó en 2009 dos acuerdos de paz con los talibanes en Swat. Según el gobierno provincial, surgió la necesidad de establecer acuerdos de paz a causa del absoluto alejamiento de las políticas del Gobierno con respecto al pueblo a la hora de abordar la cuestión de la militancia radical a lo largo de los últimos años. El Gobierno, o bien se mostraba absolutamente pasivo ante la progresiva emergencia del radicalismo, o recurría repentinamente al bombardeo aéreo y al empleo de la artillería pesada contra comunidades enteras. Los consiguientes daños colaterales invariablemente conducirían a la expansión de la base política para la militancia radical. Este proceso se prolongó durante más de cinco años a partir de 2003 y condujo a una peligrosa polarización de la sociedad. Los terroristas más extremistas sacaron partido de esta situación ya que con ello aumentó el número de militantes y el apoyo político entre la población local. Además, los radicales, a pesar de su brutalidad criminal eran ante los ojos de algunos pobres desamparados oprimidos por el Gobierno militar a instancias de EEUU.

Fue en este contexto en el que en 2008, el Gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional Awami (ANP) de la provincia decidió que recurrir al poder coercitivo del Estado sería la última opción. El gobierno provincial decidió también llevar a cabo negociaciones políticas como mecanismo para derrotar o cuanto menos neutralizar a los disidentes que eran carne de cañón de los terroristas. Los líderes de ANP consideran que la única vía para derrotar a los terroristas es privarles de sus bases políticas, que han aumentado debido a unas erróneas políticas en el pasado.

El primer acuerdo de paz se firmó entre Dir y TNSM el 21 de abril de 2008.³ Al poco tiempo de celebrarse las elecciones un *jirga* de la zona de Maidan del distrito Dir se acercó al entonces ministro jefe de honor para emprender las negociaciones de paz. Los contactos iniciales se establecieron y se pidió al *jirga* que esperara hasta que se celebrara el nombramiento formal del nuevo Gobierno. Tras la iniciativa del nuevo gobierno provincial, se emprendieron las negociaciones con el grupo de Dir y finalmente se firmó un acuerdo. Los habitantes de Dir y los seguidores de TNSM se comprometieron a renunciar a la violencia tanto dentro como fuera de las fronteras del país. Condenaron los atentados suicidas catalogándolos de inhumanos y contrarios al islam. Condenaron, asimismo, los atentados contra las fuerzas de seguridad, la propiedad del Gobierno, la propiedad privada y a personas que profesen otras religiones. Expresaron su compromiso de actuar dentro de los márgenes jurídicos del Estado y acatar las normas del Gobierno. A cambio, el Gobierno liberó a Sufi Mohammad, el líder de TNSM que superaba los setenta años. Tras el acuerdo, Sufi Mohammad acató los contenidos del acuerdo.

El gobierno provincial firmó otro acuerdo de paz con el grupo liderado por Fazalullah en Swat. El mencionado grupo contactó con el Gobierno para emprender conversaciones de paz a través de los miembros electos de la Asamblea Provincial de Swat del Partido Nacional Awami (ANP). Tras la celebración de dos sesiones ambas partes firmaron un acuerdo el 21 de mayo de 2008. De nuevo, el grupo Fazalullah renunció al empleo de cualquier tipo de violencia y en particular a los atentados suicidas. Se comprometieron a no atacar a las fuerzas de seguridad, las dependencias del Gobierno ni la propiedad privada. Aceptaron cerrar los campos de entrenamiento de terroristas y poner bajo control legal las emisoras de radio de la frecuencia modulada. Acordaron también que participaran los representantes del Gobierno en la dirección del seminario religioso que pasaría a ser una universidad islámica regida por un sistema educativo moderno.

Los medios de comunicación y otras instancias han malinterpretado la referencia a la imposición de la sharía en la División de Malakand. De hecho, los representantes del grupo

³ Entrevista personal, realizada en marzo de 2009, al señor Afrasiab Khattak, presidente provincial del Partido Nacional Awami en el Gobierno y el "enviado en misión de paz" del Gobierno, responsable de las negociaciones entre los militantes de Swat.

Fazalullah insistieron categóricamente durante las negociaciones en que no exigían una nueva legislación y sus demandas a favor de la sharía fueron confirmadas a la administración de justicia en la División de Malakand. Constituían la aplicación plena acuerdo Nizam-e-Adl de 1999.

Dicho acuerdo tuvo un impacto positivo en la situación de la seguridad general en Swat durante algún tiempo. Pero ha fracasado y se están llevando a cabo operaciones militares en Swat, Dir, Shangla y Buner. El gobierno provincial pensó que si el grupo de Fazalullah decidiera, por alguna razón, violar los términos del acuerdo no estarían emprendiendo una guerra santa contra “las fuerzas antiislámicas”, sino que estarían alentando un motín contra un Gobierno elegido en las urnas que les había dado la oportunidad de acogerse a la paz. En segundo lugar, la campaña del Gobierno contra el radicalismo y el terrorismo obtendría una legitimidad renovada. Sería más fácil que el pueblo asumiera mejor los objetivos de la política gubernamental contra el radicalismo.

El acuerdo de paz en Swat es distinto a los que se firmaron en las FATA en el sentido de que el proceso de negociación y firma ha sido transparente y abierto a los medios de comunicación y al escrutinio público. Los acuerdos provinciales se han abstenido además de liberar a los prisioneros encarcelados por presunta actividad terrorista y, no por ello menos importante, han renunciado al empleo de la violencia dentro y fuera de las fronteras del país, excluyendo la posibilidad de que se produjeran enfrentamientos a un lado y otro de la frontera desde los distritos.

Como ya mencioné anteriormente, la gestión del conflicto con los talibanes y sus colaboradores yihadistas extranjeros por parte del ejército ha sido bastante improductiva para el Estado y la sociedad pakistaníes. Hasta ahora el ejército ha defendido que la acción militar no puede erradicar el radicalismo; por lo tanto, en último término sólo cabe resolver el conflicto mediante las negociaciones pacíficas. En coherencia con este argumento, el ejército se ha implicado en negociaciones de paz nada fructíferas con los talibanes en Waziristán y en Swat. “Pakistán firmó acuerdos de paz controvertidos con militantes de las zonas tribales semiautónomas del sur de Waziristán en abril de 2004 y en el norte de Waziristán en septiembre de 2006.”⁴ Todos estos acuerdos de paz estaban condenados al fracaso porque obvian a una parte esencial en el conflicto. Hasta la fecha, todos aluden a la paz entre el ejército pakistaní y los talibanes. Los talibanes anunciaron públicamente, inmediatamente después de establecido el acuerdo, que continuarían su lucha contra EEUU y sus aliados en Afganistán. Obviamente, las fuerzas de Afganistán y EEUU/ISAF/OTAN no podían tolerar la infiltración por parte de Pakistán y debían presionar a este país para que actuara contra los talibanes.

⁴ *Pakistan deals 'aiding Taliban'*, disponible en http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6169355.stm, última consulta el 8 de junio de 2009.

Dada la percepción de la opinión pública en las zonas con población pastún de que el ejército y los talibanes son “camaradas”, surge el interrogante en torno a por qué los talibanes han estado atentando contra las instalaciones y el personal del ejército pakistaníes, que en la actualidad se hallan en ciudades grandes como Lahore y Rawalpindi. No conviene olvidar que entre las filas de los talibanes se han infiltrado facciones yihadistas extranjeras muy duras, dirigidas por árabes incluyendo uzbekos, chechenos y tajiks cuya influencia sobre los talibanes no puede ignorarse. Por lo tanto, cada vez que es asesinado un líder de Al Qaeda de segundo rango o se lanza una ofensiva militar, tiene lugar un ataque sobre las instalaciones o el personal pakistaní de seguridad. En la mayor parte de los casos, las bajas pertenecen al cuerpo de policía porque son los objetivos más vulnerables frente a los del ejército.

A la luz de los hechos parece obvio que los talibanes o bien se han hecho con el control o han extendido su influencia, excluyendo determinados centros urbanos como Peshawar y Quetta, en la totalidad del cinturón pastún en Pakistán (en las FATA, NWFP y el norte de Balochistán). ¿Puede asociarse este cambio con el repentino aumento de los efectivos de EEUU en Afganistán? Para muchos observadores del conflicto afgano-pakistaní la liquidación de las FATA, NWFP y algunas partes de Balochistán a los talibanes constituye un intento por elevar un muro de fundamentalismo religioso en la frontera con Afganistán para desbaratar cualquier inclusión planificada por las tropas EEUU/OTAN en Pakistán. El rumor según el cual se afirma que el territorio pakistaní caerá en manos de los talibanes se amplifica para garantizar la recepción de mayores ayudas para Pakistán. Muchos de los representantes de los medios extranjeros han caído presa de esta propaganda y sus reportajes refuerzan los temores creados por las fuerzas de seguridad pakistaníes.

Mientras se suceden estas dinámicas de rivalidad de poder en la región, aumenta la miseria del pueblo. Ha habido cerca de dos millones de desplazados desde Swat, Dir y Malakand durante los dos meses anteriores, a la vista de las recientes operaciones militares en Swat que se emprendieron tras el fracaso del acuerdo de paz negociado por Maulana Sufi Muhammad, el jefe de TNSM. Naciones Unidas lo ha descrito como el desplazamiento más numeroso en las últimas dos décadas. “El éxodo humano emprendido desde el valle de Swat, en el norte de Pakistán, destrozado por la guerra se está convirtiendo en la crisis de desplazados más aguda en el ámbito mundial desde el genocidio de Ruanda en 1994, advirtió la agencia de atención al refugiado de UN.”⁵ El número estimado de personas desplazadas en el interior del país desde las zonas tribales, incluyendo la división de Malakan –compuesta por seis distritos administrativos en las impresionantes faldas del Himalaya– podría fácilmente superar los dos millones hasta la fecha.

⁵ Declan Walsh, guardian.co.uk, lunes 18 de mayo de 2009 20.18 BST disponible en <http://www.guardian.co.uk/world/2009/may/18/swat-valley-pakistan-refugee-crisis>, última consulta, 8 de junio de 2009.

“La crisis más aguda de desplazados” de Malakand constituye un caso especialmente útil para comprender el fenómeno de la migración pastún. Los habitantes de Swat y de los valles contiguos son conocidos por su alto índice de alfabetización y por su actitud pacífica, mientras duró su sometimiento a un gobierno despótico benigno desde 1849. ¿Cómo es posible que la ideología extremista de los talibanes y sus aliados extranjeros pudiera introducirse entre estas personas amantes de la paz? Se ha fomentado una economía criminal encubierta por un mercado de vehículos libres de impuestos y por la mafia maderera (implificada en la despiadada tala de los bosques de Swat), utilizada para obtener apoyo para el TNSM de Sufi Muhammad y su versión más extremista, el TTP (tehrík-e-taliban-e-Pakistan) de Swat bajo la influencia de *maulvi* Fazlullah.

Algunos defienden que el ejército pakistaní se ha convertido en “en el la pieza principal del actual negocio inmobiliario en auge del país, unido al legado colonial de recompensar a determinados miembros del ejército con tierras de cultivo.”⁶ ¿Podrían considerarse las prolongadas y poco entusiastas operaciones militares contra los talibanes en Swat y el consiguiente desplazamiento de más de un millón de personas como excusas para establecer guarniciones militares y emprender un verdadero negocio inmobiliario en una de las zonas más atractivas de Pakistán? Además de estos motivos, ¿existe realmente una agenda militar que requiera la radicalización de la población mediante acciones militares poco entusiastas contra los talibanes? Existe una creciente preocupación entre muchos pastunes respecto a que pudiera estar teniendo lugar una campaña sistemática con el fin de desplazar a estas gentes pacíficas, controlar sus recursos naturales y apoderarse de zonas estratégicas con importantes fines militares en la región y más allá de ella. De hecho, algunos consideran que todas estas medidas constituyen un “genocidio” contra la población pastún.⁷

Conclusiones y recomendaciones

Mientras Pakistán no reúna la voluntad política de cambiar su política hacia Afganistán y reine sobre sus organismos de seguridad, no será posible superar al monstruo del terrorismo en Pakistán y en el conjunto de la región. El primer paso que debería dar inmediatamente el Gobierno de Pakistán sería debatir su política afgana en el Parlamento y aceptar la independencia y soberanía de Afganistán, en lugar de considerarlo como su quinta provincia.

Las FATA requieren una buena gestión. Las operaciones militares quirúrgicas contra Al Qaeda, basadas en la sensatez, deberían ir acompañadas de iniciativas políticas orientadas

⁶ Imtiaz Gul, “The Business of the Pakistan Army”, <http://www2.dw-world.de/southasia/1.192877.1.html>

⁷ Rustam Shah Mohmand, “Are the Pakhtuns undersiege?” *The News*, 30 de mayo de 2009, disponible en http://www.the-news.com.pk/daily_detail.asp?id=180348, última consulta, 8 de junio de 2009.

a conseguir el apoyo de sus habitantes. Ello sería posible mediante la aplicación de reformas políticas y administrativas, así como de planes para el desarrollo económico.

Hay una total falta de confianza entre la administración política y la opinión pública. Incluso se ha perdido la confianza mutua entre los *maliks* leales y la Administración. Dado que las FATA atraen en la atención del Gobierno federal y de los principales donantes, es extremadamente importante construir un nuevo sistema de gobierno orientado fundamentalmente al servicio público.

El fracaso por parte del Gobierno pakistaní a la hora de introducir las prometidas reformas políticas, jurídicas y administrativas agrava aún más la situación en las FATA. Los partidos políticos son ilegales. Los elementos terroristas llenan el vacío social y político producido por el resquebrajamiento del sistema. Es extremadamente urgente que el Gobierno pakistaní permita a los habitantes de las zonas tribales elaborar sus propios marcos jurídicos en la asamblea provincial de NWFP y el Parlamento. Es prioritaria la incorporación en las FATA de un sistema de gobierno local representativo.

Los pastún de Pakistán han dado cobijo a más de tres millones de refugiados afganos en sus territorios durante más de treinta años. Su economía lleva demasiado tiempo estrangulada, y sus recursos naturales se han mermado debido a esta enorme afluencia de inmigrantes. En lugar de recompensarles por esta inigualable hospitalidad, sin precedentes históricos, se les castiga y expulsa de sus hogares en nombre de la lucha contra los talibanes. Es bien sabido que el ejército pakistaní tiene capacidad suficiente para detener a los líderes talibanes en cuestión no de meses sino de días, siempre y cuando deje de considerar a los talibanes como "activos estratégicos". Ya va siendo hora de que la comunidad internacional advierta la dualidad implícita en la gestión del conflicto con los talibanes para el mantenimiento de la seguridad en Pakistán; el requisito para su consecución es que el Gobierno pakistaní ponga fin al drama talibán en sus tierras, ya que lleva manteniéndose demasiado tiempo a expensas de las miserables condiciones en las que vive la gente corriente y constituye una amenaza al sistema de seguridad internacional.